

## JOSÉ ROBLEDANO TORRES ANTE EL JUZGADO MILITAR DE PRENSA

Juan A. Ríos Carratalá

Ja.rios@ua.es

El pintor, caricaturista e ilustrador José Robledano Torres (1884-1974) era un conocido del juez Manuel Martínez Gargallo desde los tiempos de *Buen Humor* y otras revistas renovadoras de los años veinte. La circunstancia no garantizaba una mejor suerte en los consejos de guerra sumarísimos instruidos en el Juzgado Militar de Prensa. Las razones quedaron explicadas en *Nos vemos en Chicote* (2014), pero conviene descender a lo concreto de los sumarios depositados en el Archivo General e Histórico de Defensa para comprobar que, en un engranaje concebido para la represión y el exterminio del enemigo, los detalles propios de la amistad quedaban en un segundo plano o simplemente eran ignorados.

El 6 de junio de 1939, el juez Manuel Martínez Gargallo se puso en contacto mediante oficio con la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, en Madrid, para interesarse por el preso José Robledano Torres, domiciliado en la calle Ríos Rosas, n.º 30. El comisario jefe le contesta el 20 de junio informándole que el caricaturista había sido detenido e ingresado en la prisión habilitada en el convento de Las Comendadoras. El lúgubre edificio de Malasaña se sumó a las más de veinte cárceles donde se hacinaban los detenidos en el Madrid de la posguerra. La gestión prueba el carácter previsor del juez, pues hasta el 15 de julio de 1939 no recibe la orden del auditor para que proceda a instruir el juicio sumarísimo de urgencia número 33.584 contra el amigo de los tiempos donde ambos colaboraban en las revistas de humor.

El eficiente secretario del juzgado procede en este caso con una prontitud realmente notable. El mismo 15 de julio inicia las tareas correspondientes dando fe y testimonio, como en otras ocasiones, de la «ficha en la que se recogen los informes que han sido suministrados por personas y entidades de absoluta solvencia acerca de la actividad profesional del encartado José Robledano Torres». A diferencia de lo sucedido con el periodista Javier Bueno, en esta ocasión el testimonio se refiere a un «encartado» y no a un «condenado»,

diferencia que para el caricaturista podía suponer librarse del fusilamiento y contar con alguna posibilidad de salir vivo de las cárceles de la posguerra.

La ficha elaborada a partir de fuentes anónimas, siempre determinante para el resto del proceso, señala que el socialista José Robledano Torres colaboraba con Javier Bueno en *Claridad*, «órgano en la prensa de Largo Caballero». El dato es cierto, pero afortunadamente el testimonio ignora que esa colaboración se extendió al diario asturiano *Avance*, cuya labor resultó decisiva en la revolución de octubre de 1934. La participación del caricaturista en el órgano del SOMA-UGT es propia de una persona de «antiguas y muy exaltadas ideas marxistas», hasta el punto de que su participación fue decisiva para que la «apolítica» Agrupación Profesional de Periodistas se integrara en la UGT.

El testimonio del secretario y alférez del Cuerpo Jurídico continúa indicando que José Robledano Torres desde antes de la guerra llevó a cabo en la prensa una campaña «feroz contra todo lo que representase orden y religión», pero la misma «se acrecentó aún más con la iniciación del Movimiento Nacional, a partir del cual comenzó a publicar tales cosas que su labor no puede menos de calificarse como la más violenta y soez que se ha hecho hasta ahora en un diario de España». Como prueba de semejante violencia, el secretario localiza, recorta y adjunta una serie de dibujos del encartado publicados en *Claridad* durante la guerra. La presencia de obispos con simbología nazi no debió tranquilizar a los miembros del plenario en el correspondiente consejo de guerra, en especial después de leer el auto resumen preparado por el juez instructor, donde se consideraba tales dibujos como incitadores para que las hordas rojas cometieran desmanes.

La labor de José Robledano Torres, de acuerdo con la ficha cuya consulta quedaba reducida al secretario, «no ha podido ser más demoledora», pero el testimonio añade nuevos datos para el procesamiento del caricaturista madrileño: «Ha sido presidente de la Unión de Dibujantes, de la Asociación de la Prensa y comisario de Guerra, cargo en el que no llegó a ejercer actividad de importancia por cuanto sus compañeros de comisariado huyeron de Madrid tan pronto como vieron a las fuerzas Nacionales». La información de la ficha es imprecisa y no distingue entre una propuesta de nombramiento y el propio nombramiento, pero el testimonio del secretario evidencia motivos suficientes -

de acuerdo con la lógica de los vencedores- para iniciar el proceso contra un pintor, caricaturista e ilustrador de firmes convicciones socialistas.

Los plazos corrían veloces en los sumarísimos de urgencia, al menos en algunos, y el 17 de julio del «Año de la Victoria» Manuel Martínez Gargallo dicta la orden de proceder contra el preso José Robledano Torres, que por entonces ya estaría en la segunda galería de la cárcel de Porlier. Con el objeto de instruir la causa, el antiguo humorista solicita asimismo informes de la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad y del «señor jefe de Información e Investigación de Falange Española Tradicionalista», de acuerdo con una dualidad que se repite en la instrucción de la práctica totalidad de los casos. La labor en estos menesteres policiales del ministerio de la Gobernación y del partido falangista fue paralela cuando no superpuesta. Finalmente, el juez también ordena que se aporten «a autos cuantos antecedentes sean oportunos, así como varios ejemplares del diario *Claridad* en que aparezcan trabajos del encartado». Los seleccionados fueron determinantes para la condena a muerte.

Apenas dos días después, el secretario y el juez se desplazan al establecimiento carcelario, probablemente Porlier, para interrogar a José Robledano Torres. El caricaturista no fue preguntado por los viejos tiempos del humor en la prensa periódica o las revistas renovadoras, sino por su condición profesional. El también laureado pintor reconoció ser catedrático de dibujo en un instituto de Guadalajara desde 1933, aunque durante la guerra trabajó en otro centro de Madrid. La depuración docente y la denuncia voluntaria de un colega le privarían más adelante de este sustento vital. El interrogado reconoce que pertenece a la UGT con anterioridad a 1931 y al partido socialista desde 1933, «siendo hombre de convicciones antifascistas y socialistas». El subrayado figura en el documento del sumario para facilitar la consulta de los siempre apresurados miembros de los consejos de guerra permanentes. Los miles de casos pendientes requerían una urgencia incompatible con cualquier atisbo de rigor o ponderación.

José Robledano Torres permanecía en contacto con varios procesados en la cárcel de Porlier. Los testimonios gráficos que nos legó así lo evidencian y el dibujante sabía que el Juzgado Militar de Prensa estaba en la plaza del Callao, n.º 4. La localización nada casual facilitaba la incautación de la documentación relacionada con las actividades gremiales de los periodistas durante la guerra.

La circunstancia quedó explicada en *Nos vemos en Chicote*. Por lo tanto, negar las evidencias documentadas por los instructores era una pérdida de tiempo, con el hipotético riesgo de recibir algún que otro golpe. José Robledano Torres también reconoce haber presidido la Agrupación Profesional de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Madrid en diferentes fechas del período bélico. De la Unión de Dibujantes señalada en la ficha ya nunca se volvió a saber, a pesar de su activismo durante el período republicano. Las fuentes anónimas no suelen ser un modelo de precisión porque nadie responde de lo dicho. La frecuente venganza tenía garantizada la impunidad.

José Robledano Torres también reconoce ser el autor de las caricaturas publicadas en *Claridad* y haber actuado contra las figuras señeras del Glorioso Movimiento Nacional, «aunque- dice- no lo hizo con ensañamiento». El añadido es propio de la forzada ingenuidad de quienes buscaban salvar el pellejo por no tener «las manos manchadas de sangre», de acuerdo con la incumplida promesa del general Franco. Sin embargo, el ilustrador de libros de Valle-Inclán y otros autores de prestigio niega cualquier relación con *La Traca*, de Valencia, para evitar la misma suerte en el paredón que tuvieron sus artífices. El madrileño supondría que el secretario del juzgado no tendría acceso a la hemeroteca valenciana y conocía la especial inquina de los vencedores contra la revista satírica de Vicent Miquel Carceller. La inexistencia de una colección de la publicación anticlerical durante la guerra en las bibliotecas madrileñas fue un alivio para escritores y dibujantes, aunque el secretario del juzgado consiguiera localizar algunos ejemplares incluidos en la instrucción de casos como el Enrique Martínez Echevarría.

El también anticlerical José Robledano Torres era un pluriempleado de la pluma y cobraba quinientas pesetas mensuales por su trabajo en *Claridad*. Preguntado por su actividad en la prensa, el madrileño manifestó al juez y su secretario que la labor realizada «era consciente, desde el punto de vista de [la] discrepancia ideológica, ahora bien, no encarnando -digo- no realizando labor injuriosa ninguna, ya que [el procesado] cree que la persona que injuria o utiliza como medio de propaganda el insulto es un cobarde o un indigno».

El interrogado cierra su ingenua o desesperada estrategia a la búsqueda de eludir la pena de muerte, los treinta años estaban asegurados en la condena,

negando que colaborara en la resistencia preconizada por «los dirigentes rojos». José Robledano Torres declara ser «amante de la paz, de la tranquilidad y enemigo de todo cuanto sea destrucción». Durante la guerra -según él- colaboró en este sentido «del modo que lealmente sentía», pero el mismo nunca fue considerado como atenuante en estos consejos de guerra. El suyo ni siquiera fue tenido en cuenta en el auto resumen o en la sentencia.

A diferencia de su amigo Javier Bueno, el caricaturista contó con avales en su defensa. Los mismos debían ser de personas de «reconocida solvencia moral». El médico Juan Grinda Saavedra, hijo de un facultativo del Palacio Real, redacta de su puño y letra un aval fechado el 23 de abril de 1939, mucho antes de iniciarse el proceso oficialmente y cuando José Robledano Torres ya estaba preso. Aparte de considerarle incapaz de cometer algún delito por su carácter pacífico, el avalista explica que siendo un hombre de derechas condenado por «desafecto al régimen rojo» no tuvo problema alguno para seguir trabajando como médico de la Asociación de la Prensa. La continuidad laboral la debió a la protección dispensada por su amigo, que llegó a discutir con un fiscal republicano para mantenerle en su puesto. El 10 de julio y ante el juez Manuel Martínez Gargallo y su secretario, Juan Grinda Saavedra ratifica el contenido de su aval en todos sus extremos e indica que «conoce hace mucho tiempo a José Robledano Torres, considerándole como persona izquierdista, aunque le repugnan todos los crímenes y excesos de la horda roja». El testimonio del médico no fue tenido en cuenta en el auto resumen de la instrucción, al igual que en otros casos analizados en la presente investigación.

La totalidad de los vecinos del caricaturista en su domicilio madrileño de la calle de Ríos Rosas, n.º 30, le avaló mediante un escrito firmado el 10 de julio -antes del inicio oficial del procesamiento- y ratificado ante el juzgado cuatro días después, cuando la instrucción todavía no había sido iniciada por orden del auditor. A efectos de las escasas garantías jurídicas, resulta sorprendente que el juez y su secretario firmen la declaración del testigo Manuel Boj Gan -en representación de los vecinos- cuando todavía no se había recibido la orden del auditor para instruir el sumario. La posible irregularidad es propia del descontrol en que se desenvolvían algunos trámites de estos sumarísimos de urgencia. En

cualquier caso, el texto de quienes en aquellos momentos de tan justificado temor se atrevieron a defender a su vecino «rojo» merece ser reproducido:

Hacemos constar que conocemos a don José Robledano Torres, inquilino del piso segundo izquierda de la mencionada casa, y respondemos de su correcta actuación como convecino durante la dominación roja. En el transcurso de este período, con su valiosa y eficaz intervención, en varias ocasiones impidió que en esta casa hubiese que lamentar el menor desmán o abuso, ni sufriéramos los firmantes la más mínima molestia, a pesar de conocer nuestro ideario derechista y de saber que, con regularidad, se venían celebrando actos y reuniones religiosas en uno o varios de los cuartos del inmueble.

El texto del aval viene acompañado de treinta y cuatro firmas de «los vecinos de derechas de José Robledano Torres». El documento de estas personas, probablemente también de «probada solvencia moral», corrió la suerte que otros tantos del mismo estilo: olvido absoluto como consecuencia de un menosprecio. Ni siquiera hay una mención a su existencia en el conjunto del sumario. No obstante, el gesto de solidaridad y humanidad honra a aquellos vecinos de derechas, probablemente ignorantes de que los usos y las costumbres de la buena vecindad no constituían una materia a tener en cuenta en los consejos de guerra sumarísimos.

El juez debió sorprenderse por la ingenuidad del testimonio y preguntó al citado representante de los vecinos, un valiente en aquellas circunstancias, si los firmantes conocían la labor periodística del caricaturista. Su respuesta, según consta en el sumario, merece una reflexión acerca de un comportamiento humanitario que apenas fue tenido en cuenta por las autoridades militares y judiciales encargadas de la represión:

Conoce la labor que se realizaba en *Claridad* en contra de la Causa Nacional, sin que pueda aportar ningún dato respecto a la campaña antinacional que allí llevaba a cabo; conociendo únicamente al citado Robledano como vecino, el cual dio prueba de sus buenos sentimientos durante la dominación roja.

La labor del secretario adscrito al Juzgado Militar de Prensa volvió a ser fundamental en el proceso, en este caso por la reproducción de un acuerdo reflejado en el libro de actas de la Asociación Profesional de Periodistas, que había sido incautado por el citado juzgado. En concreto, se trata de la sesión celebrada el 18 de octubre de 1936, cuando el avance de las tropas del general Franco amenazaba la continuidad de Madrid en el territorio fiel a la II República. Dada la relevancia de los participantes en la reunión y no constándome que el libro de actas incautado haya quedado en los archivos públicos tras su utilización para la represión y la depuración de los periodistas, a continuación, doy fe y testimonio de lo reproducido el 25 de julio de 1939 por el diligente secretario:

COMITÉ DE GUERRA: El compañero Modesto Sánchez Monreal informa sobre una reunión celebrada en la Casa del Pueblo para tratar de la situación de los comisarios de guerra y otros asuntos. Se refiere al discurso pronunciado en dicha reunión por el compañero Pascual Tomás en representación de la UGT, quien hizo notar la necesidad de que los sindicatos se dispusieran por todos los medios a acometer la defensa de Madrid. Sobre este mismo tema hablaron los compañeros Vivero, Izcaray, Robledano, Chaves Nogales, Alardo Prats, Olmedilla, Herce, Cabello y otros representantes, todos en tono de gran entusiasmo por la causa de la República. Se acuerda aprobar el nombramiento de Sánchez Monreal, Robledano y Núñez Tomás como comisarios de guerra, según se comunicó a la junta administrativa de la Casa del Pueblo el día quince del actual y constituir un comité de guerra formado por los tres comisarios citados y los compañeros Izcaray y Chaves Nogales, quienes se encargarán de organizar como mejor proceda todo lo relativo a nuestra aportación al Ejército Popular.

El documento deberá ser tenido en cuenta para la reconstrucción de los polémicos últimos días de Manuel Chaves Nogales en el Madrid sitiado. Otros periodistas, como Augusto Vivero, no pudieron dar explicaciones para la posterioridad porque acabaron fusilados tras la llegada, definitiva, de las tropas del general Franco.

La labor del secretario instructor en su búsqueda de pruebas de cargo para la acusación se completó, de acuerdo con el sumario depositado en el Archivo

General e Histórico de Defensa, con la aportación de un total de veintiún dibujos publicados por José Robledano Torres en *Claridad*. La selección del alférez buscó aquellos que pudieran ser incriminatorios y, por supuesto, así queda reflejado en el auto resumen firmado por el juez el 5 de agosto de 1939, que pide el procesamiento

Por estimar plenamente acreditado que dicho individuo, que es de antiguas y exaltadas ideas marxistas, realizó en el periódico *Claridad*, órgano de la fracción más avanzada del socialismo español, una campaña difícilmente superable contra los sentimientos que encarnaba el Movimiento Nacional, llena de injurias y expresiones soeces tendiendo con todo ello a alentar la resistencia armada contra la auténtica España e incluso incitando al asesinato en momentos de gran peligro para las personas de orden y principalmente del clero a quien pintaba como enemigo feroz del proletariado; habiendo desempeñado desde su cargo de presidente de la Asociación de la Prensa una función que en la ayuda a la rebelión excede de lo meramente profesional.

El auto resumen de Manuel Martínez Gargallo, representante de la «auténtica España» que por entonces representaba un bien jurídico a proteger, hacía previsible una condena a muerte. El secretario lo remitió junto a la totalidad del sumario de «treinta y nueve folios útiles», incluidos los recortes de prensa, al decanato de las secretarías de Consejos de Guerra.

Manuel Martínez Gargallo no había suavizado la acusación a su antiguo colega de las revistas de humor, pero el 10 de agosto el fiscal jurídico militar devuelve lo instruido al juez a fin de que se proceda a la práctica de diferentes diligencias. La primera es una ampliación de la declaración indagatoria del procesado para especificar el tiempo y la forma de su actuación como comisario de guerra, un punto que resultaba fundamental para pedir la condena a muerte. La segunda debería procurar la mayor información posible sobre la actuación del encartado como presidente de la «Agrupación Profesional de Periodistas» -la denominación es errónea- y de la Asociación de la Prensa, «sobre todo en lo que respecta a los hechos delictivos que en las mismas o por las mismas entidades se hubieren cometido, y participación del procesado directa o indirectamente en ellos, en su calidad de presidente de las mismas».



El 21 de agosto de 1939 fue ratificada la petición del fiscal por el Consejo de Guerra Permanente n.º 8 en un escrito dirigido al Ilmo. Sr. Auditor del Ejército de Ocupación. El juez Manuel Martínez Gargallo no debió actuar con la celeridad de casos como el de Javier Bueno y el fiscal, habiendo constatado que no se había cumplido su anterior petición, el 8 de septiembre de 1939 pide la devolución del sumario al instructor para la práctica de las diligencias solicitadas. La petición fue respaldada por el citado Consejo de Guerra Permanente el 22 de septiembre de 1939. El auditor accede a ambas peticiones y el 27 de septiembre devuelve el sumario al Juzgado Militar de Prensa.

La falta de celo en las tareas represivas era una cuestión seria. Manuel Martínez Gargallo y su secretario debieron ser conscientes de no haber realizado un trabajo plenamente satisfactorio a los ojos de sus superiores y procedieron en consecuencia. La circunstancia distaba de ser insólita, pero podía ser preocupante para los miembros honorarios del Cuerpo Jurídico. El 1 de octubre de 1939, ambos oficiales del Ejército firman una providencia para ampliar «la declaración del indagado de acuerdo con lo interesado por el ministerio fiscal» y redactar «un informe a la vista de los libros de actas sobre la actuación [de José Robledano Torres] al objeto de que consten sus actuaciones como presidente de la Asociación de la Prensa y hechos delictivos en que pudo tener intervención». La redacción es mejorable, pero la intención resulta inequívoca.

La probable falta de celo debía ser reparada con prontitud para evitar una mala imagen. El 6 de octubre, el juez y su secretario se desplazaron a la cárcel de Porlier para interrogar de nuevo a José Robledano Torres. Preguntado acerca de su nombramiento como comisario, el caricaturista declara «que no llegó a hacerse cargo de dicho nombramiento, que no fue más que una designación que hizo la citada agrupación, y que no se llevó a efecto». La respuesta no debió satisfacer al juez, puesto que reitera la pregunta aduciendo los datos reflejados en el libro de actas incautado por el juzgado. No obstante, el interrogado declara que «dicho nombramiento no fue más que una simple propuesta, sin que tuviera ningún otro alcance». Preguntado asimismo por sus actividades al frente de las citadas agrupaciones de periodistas, José Robledano Torres manifiesta «que no cometió ningún desmán durante el tiempo en que fue presidente de ambas

entidades, desde últimos de 1937 a 1939, pudiendo esto atestiguarlo D. Mariano López de Oro y su hermano D. Manuel».

En la copia del sumario que me fue remitida por el Archivo General e Histórico de Defensa el 7 de agosto de 2014 no consta que Manuel Martínez Gargallo y su secretario recabaran el testimonio de los citados hermanos, pero el 25 de octubre de 1939 ambos oficiales del Cuerpo Jurídico firman un detallado informe de cuatro folios sobre la actuación de José Robledano Torres en las agrupaciones de periodistas. El texto indica la existencia de una incautación y detalla con precisión las intervenciones del encausado. El balance del instructor es muy negativo para la suerte de su colega de las revistas de humor: «como posibles figuras delictivas aparecen a juicio de este instructor las que se derivan de los hechos que quedan relacionados, así como el de haberse mantenido durante todo el tiempo la incautación a todas luces ilegal llevada a cabo en la Asociación de la Prensa». El secretario, por su parte, adjunta un recorte publicado en *ABC* el 26 de abril de 1938 donde se da cuenta de la entusiasta adhesión de la Agrupación Profesional de Periodistas al gobierno republicano. El precio de la colaboración con las autoridades republicanas era caro porque, aun siendo legal en su momento, se consideraba adhesión a la rebelión.

El destino del encausado había empeorado desde el primer auto resumen y, tras la práctica de unas diligencias que no incluyeron -a tenor de lo conservado en el sumario- el testimonio de los hermanos López de Oro, el juez dicta un segundo auto resumen que probablemente carece de fecha propia porque sustituye al anterior. El texto predice una condena a la pena de muerte de acuerdo con los usos del momento y ratifica el procesamiento

Por estimar plenamente acreditado que [José Robledano Torres] fue siempre de antiguas y exaltadas ideas marxistas, realizó en el periódico *Claridad*, órgano de la fracción más avanzada del socialismo español, una campaña difícilmente superable contra los sentimientos que encarnaron el glorioso Alzamiento Nacional, con la que tendía consciente y constantemente a alentar a la resistencia armada contra la auténtica España, llegando a publicar multitud de caricaturas que, como las reseñadas en los folios 13, 17, 18, 26 y 28 [del sumario], veían la luz pública en época en que no podía ocultársele que los religiosos sufrían

una persecución de la que no existen precedentes en la historia contemporánea y que dirigidas a un público inculto, y difícilmente contenible en momentos en que brillaba por su ausencia el principio de autoridad, no podían producir otro resultado sino el de incitar aún más a las horribles matanzas de religiosos que se llevaban a efecto.

El representante de «la auténtica España» consideraba que los lectores de *Claridad* constituían «un público inculto» y, como tal, predispuesto a la violencia. La temeraria afirmación participa del criterio clasista tan habitual en estos documentos. El sumario de quien con unas caricaturas había incitado a cometer «horribles matanzas de religiosos» pasó de treinta y nueve a cuarenta y nueve folios, pero sobre todo empeoró el destino del encartado. El secretario lo remitió a la superioridad «por conducto de la Inspección», mientras el procesado permanecía en la cárcel de Porlier, desde donde fue conducido a la sesión plenaria de un consejo de guerra que le condenó a muerte. La documentación de esta última fase del proceso no consta en las copias que me fueron remitidas por el Archivo General e Histórico de Defensa. De la misma manera que en un legajo he encontrado documentos de otros sumarios, a veces el solicitado está incompleto sin que quepa achacar responsabilidad alguna a los eficientes archiveros de esta etapa democrática.

José Robledano Torres tuvo la inmensa suerte de estar casado con Magdalena Piqueras, cuya actuación resultó decisiva para que la pena de muerte se conmutara por una de treinta años y, finalmente, el dibujante pudiera salir en libertad condicional en 1944, tras pasar siete meses en Porlier y cumplir el resto de la condena en el terrible penal de Valdenoceda y en el de Aranjuez. La esposa no solo movió los hilos de las influencias para evitar el fusilamiento, sino que junto con otras mujeres de presos montó una freiduría. El objetivo de la misma era conseguir algo de dinero para sufragar los gastos de la atención médica de los presos, pues fueron muchos los fallecidos a causa de la desnutrición y la miseria en aquellas cárceles. Una de las pruebas más impactantes es el conjunto de dibujos del propio José Robledano Torres que reflejan la situación de hacinamiento, frío, soledad y miedo de los presos políticos. Magdalena Piqueras los sacó de la cárcel envueltos en la ropa sucia del esposo y los conservó hasta que la llegada de las libertades permitió su difusión. Ahora se conservan en la

Biblioteca Nacional de España, como el testimonio de una infamia cuya ejecución quedó reflejada en una documentación judicial que pongo a disposición de los interesados para corregir posibles errores o completar la información antes de publicar el ensayo sobre el Juzgado Militar de Prensa.